

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Tres (03) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio No. 118.

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2020-00016-00
DEMANDANTE:	SANDRA LORENA MURILLO VELEZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE

1. ASUNTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la medida cautelar de embargo solicitada por el apoderado judicial de la parte ejecutante

2. ANTECEDENTES

La parte ejecutante solicita decretar la medida cautelar de embargo y retención de los dineros que el municipio de Palmira – Valle, posea a cualquier título en las siguientes entidades bancarias: “*Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Sudameris, Bancolombia, Banco Agrario, Banco Popular, Av Villas, Davivienda, BBVA, Banco Caja Social y Banco Pichincha*”.

Con el fin de resolver sobre la medida cautelar solicitada, debe indicarse que el artículo 63 de la Constitución Política, prohíbe el embargo de los bienes y rentas de las entidades públicas, así como los bienes de uso público de propiedad de la Nación y además aquellos que determine la ley.

A su turno, el artículo 357 de la Constitución Política, determina que los municipios participarán en los ingresos corrientes de la Nación y que la ley determinará el porcentaje mínimo de esa participación definiendo las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos.

En desarrollo del artículo anterior, se expidió la Ley 715 de 2001, la cual estableció en su artículo 91, la prohibición de la unidad de caja de los recursos del sistema general de participaciones con los demás recursos del presupuesto de las entidades territoriales y, en este sentido, determinó que estos recursos no pueden ser objeto de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera. Igualmente, en el artículo 18 ibidem, se dispuso que los recursos del sector educativo no pueden ser objeto de embargo.¹

¹ En los términos de la Sentencia T-873 de 2012, se puede determinar que los recursos del sistema general de participaciones son inembargables. De dicha providencia, se resalta: “...*El Sistema General de Participaciones está integrado por los recursos que en virtud de los artículos 356 y 357 de la C.P., son transferidos de la Nación a las entidades territoriales, de modo que se puedan financiar los servicios cuya competencia les asigna la ley 715 de 2001. El artículo 3º de la Ley 715 de 2001 –modificado por el artículo 1º de la Ley 1176 de 2007- señala que el Sistema General de Participaciones está constituido por: i) Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se denomina participación para educación; ii) Una participación con destinación específica para el sector salud, que se denomina participación para salud y iii) Una*

El artículo 19 del Decreto 111 de 1996, por medio del cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, reiteró que son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

Este artículo, fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-365 de 1997 y al respecto se estimó que: *“los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.”*

Por otra parte, el Decreto 1101 de 2007, por medio del cual se reglamenta el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, los artículos 1º y 91 de la Ley 715 de 2001, y se dictan otras disposiciones, determinó: *“...Los recursos del Sistema General de Participaciones, por su destinación social constitucional, no pueden ser objeto de embargo. En los términos establecidos en la Ley 715 de 2001, los recursos del Sistema General de Participaciones no harán unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores.”*

De otro lado, se tiene que el artículo 594 del Código General del Proceso, dispone que no se pueden embargar los bienes, las rentas y los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social, así:

“ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. *Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:*

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(...)

3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.

participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y saneamiento básico, que se denomina participación para propósito general”.

5. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

(...)

16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.”

En los términos antes referidos, es claro que el artículo 594 del C.G.P., estatuye la prohibición general de decretar embargos sobre bienes de naturaleza inembargable y, puntualmente en el caso de los municipios, el referido artículo debe armonizarse con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Esta norma dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 45. NO PROCEDIBILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar del embargo no aplicará sobre los recursos del sistema general de participaciones ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra.

En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.

En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.

PARÁGRAFO. De todas formas, corresponde a los alcaldes asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio, para lo cual deberán adoptar las medidas fiscales y presupuestales que se requieran para garantizar los derechos de los acreedores y cumplir con el principio de finanzas sanas.”

De manera que, tampoco resulta procedente el embargo sobre los recursos del sistema general de participaciones, del sistema general de regalías, de las rentas propias con destinación específica para el gasto social de los municipios y de las sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios que hagan los particulares a favor de los municipios.

Esta norma especial, dispuso sobre la improcedibilidad de decretar medidas cautelares de embargo en donde sea parte demandada un municipio, antes de que haya quedado ejecutoriada la sentencia o la providencia correspondiente que ordene seguir adelante con la ejecución.

Según lo expuesto se puede establecer que, frente a las medidas cautelares solicitadas en contra de las entidades territoriales, **son inembargables** los siguientes bienes:

Tipo de bien	Fundamento Legal
Bienes, rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales	Numeral 1 del artículo 591 del C.G.P.
Cuentas del sistema general de	Numeral 1 del artículo 591 del

participaciones	C.G.P.
Cuentas del sistema general de regalías	Numeral 1 del artículo 591 del C.G.P.
Recursos de la seguridad social	Numeral 1 del artículo 591 del C.G.P.
Recursos del sistema general de participaciones	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.
Recursos del sistema general de regalías	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.
Rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios.	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.
Sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.

A partir de lo anterior, es menester señalar que el principio absoluto de inembargabilidad de los bienes o recursos antes referidos, trae una excepción en el parágrafo del artículo 594 del C.G.P.C., en razón a que otorgó la facultad al funcionario que ordena la medida cautelar, de ordenar embargos sobre los bienes enlistados en artículo 594 ibidem, siempre que se cumpla con la carga argumentativa de invocar y explicar de manera clara y precisa el fundamento legal para la procedencia de la medida. En efecto, preciso:

“Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.”

En este contexto, es menester señalar que el principio absoluto de inembargabilidad de los recursos que hacen parte del sistema general de participaciones, fue condicionado en sentencia C-1154 de 2008, en el sentido de permitir de manera excepcional el decreto de medidas cautelares para el pago de obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia.

En dicha providencia, el Alto Tribunal expuso en síntesis lo siguiente:

*“...El Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el **Presupuesto General de la Nación**. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.*

*4.3.1.- **La primera excepción** tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u **obligaciones de origen laboral** con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Al respecto, en la Sentencia C-546 de 1992, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de que “en aquellos casos en los cuales la*

efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

(...)

4.3.2.- La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. Así fue declarado desde la Sentencia C-354 de 1997, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación), “bajo el entendido de que **los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados** mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, **con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones,** cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”.

(...)

4.3.3.- Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible. En la Sentencia C-103 de 1994 la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de varias normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la ejecución contra entidades de derecho público y la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación. “

Revisados los preceptos legales y los pronunciamientos dados por la Corte Constitucional² se logra determinar que la regla general es la inembargabilidad de los recursos públicos, toda vez que con ello se asegura la consecución de los fines esenciales del Estado y se garantiza la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, el principio de inembargabilidad de los recursos públicos no puede ser considerado como **absoluto**, existiendo en principio tres (3) excepciones a la regla general, las cuales pasaran a exponerse en los términos del pronunciamiento dado por el Consejo de Estado en providencia fechada 08 de mayo de 2014³, en donde sintetizó:

“...No obstante, este principio no puede ser considerado absoluto, pues la aplicación del mismo debe entenderse de acuerdo a los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional.

*Es por esto que la Corte en reiteradas oportunidades ha sostenido que el citado principio respecto del **presupuesto de las entidades** y órganos del Estado encuentra algunas excepciones cuando se trate de⁴:*

*i) **la satisfacción de créditos u obligaciones de origen laborales,** necesaria para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo*

² Al respecto, ver sentencias de la Corte Constitucional C-546 de 1992, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-354 de 1997, C-793 de 2002, C-566 de 2003 y C-192 de 2005.

³ Consejo de Estado, Sección cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicación número: 11001-03-27-000-2012-00044-00(19717), actor: Marlon Andrés Muñoz Guzmán, demandado: Superintendencia Financiera de Colombia.

⁴ Cfr. sentencias C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.

en condiciones dignas y justas⁵;

ii) sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones⁶; y

iii) *títulos que provengan del Estado⁷ que reconozcan una obligación clara, expresa y actualmente exigible⁸. Tanto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia como el que crea el propio Estado a través de los modos o formas de actuación administrativa que regula la ley.*

Tratándose de los recursos del Sistema General de Participaciones, la Corte Constitucional ha dicho que el artículo 21 del Decreto 28 de 2008⁹, teniendo en cuenta la regulación vigente a partir del Acto Legislativo No. 4 de 2007, se ajusta a la Constitución, en la medida en que se consagra la inembargabilidad de los recursos del SGP a la vez que autoriza el embargo de otros recursos del presupuesto de las entidades territoriales, de modo que garantiza la destinación social constitucional del SGP sin desconocer los demás principios y valores reconocidos en la Carta Política, particularmente en cuanto a la efectividad de las obligaciones de orden laboral¹⁰” (Negrilla y Subrayado del Despacho)

Finalmente, el Alto Tribunal concluyó:

“En síntesis, la regla general es la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado, salvo que se trate de créditos laborales, el pago de sentencias y demás obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles a cargo del Estado, para lo cual debe acudir al procedimiento señalado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo o en los artículos 192, 194, 195 y 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso. Ahora bien, tratándose de recursos provenientes del SGP, éstos también son inembargables con la única excepción respecto de las obligaciones de naturaleza laboral.”

Con relación a la vigencia de las excepciones a la regla general de inembargabilidad antes expuestas, el Consejo de Estado en sede de tutela, a través de la sentencia fechada el **25 de marzo de 2021**¹¹, reiteró los siguientes argumentos:

⁵ Cfr. sentencias C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T-262 de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004.

⁶ Cfr. sentencia C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192 de 2005, entre otras.

⁷ Que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos.

⁸ Sentencia C-354 de 1997.

⁹ Inembargabilidad. Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables. Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relacionadas con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes.

Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes.

¹⁰ Sentencia C-1154 de 2008.

¹¹ C.E., Sección Quinta, Exp. 20001-23-33-000-2020-00484-01(AC), mar. 25/21. C.P. Rocío Araujo Oñate.

“...Siendo ello así ha precisado que, el legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación, pero que, ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, por cuanto el postulado de la prevalencia del interés general comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.

La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; la segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, excepción que fue consagrada desde la sentencia C-354 de 1997, en la que la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación) (...)

*Las circunstancias excepcionales referidas **mantienen plena vigencia** con respecto la regla general de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación aun con la existencia en el ordenamiento del artículo 594 del Código General del Proceso, el cual debe interpretarse con los parámetros establecidos por la Corte, pues únicamente así es dable garantizar los principios y valores contenidos en la Carta, exigiéndose sí que se haya agotado, sin éxito, el plazo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, lo cual ocurrió en el caso concreto y, adicionalmente, el proceso ejecutivo ha sido ineficaz para lograr el pago efectivo de la obligación, causándose intereses moratorios.*
(....)

De la ratio de las sentencias de constitucionalidad que han precisado las excepciones a la regla general de inembargabilidad, resulta forzoso concluir que el artículo 594 del Código General del Proceso debe interpretarse teniéndolas en cuenta, esto es, incluyéndolas a la hora de darle alcance en el caso concreto, a efectos de hacer efectivos derechos y principios de raigambre fundamental, respecto de los cuales la aplicación de la prohibición de embargar recursos del Presupuesto General de la Nación, los tornaría nugatorios.”

Así las cosas, debe concluirse que, si bien el Código General del Proceso en su artículo 594 ha reiterado la imposibilidad de embargar los recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación, de la Seguridad Social y las cuentas del Sistema General de Participación, lo cierto es que jurisprudencialmente se ha considerado que dicha prohibición no es absoluta y debe ser valorada atendiendo las particularidades de cada caso. Es por ello que, en razón a que en el presente asunto se pretende el pago de una acreencia contenida en una decisión judicial, en la que inclusive se reconoció un derecho de índole laboral y a la fecha de esta providencia la entidad territorial ejecutada no ha atendido los plazos que la ley dispone para su cancelación, resulta procedente la medida solicitada

Además, en el asunto que nos ocupa la providencia que ordena seguir adelante la ejecución, se encuentra en firme y sin recurso alguno, por lo que también resulta viable acceder a decretar la medida cautelar de embargo, conforme a lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Expuesto lo anterior, se procederá a decretar la medida cautelar de embargo solicitada por la parte ejecutante y, en este sentido, se ordenará librar por secretaria los oficios a las respectivas entidades bancarias en donde el **municipio de Palmira – Valle**, tenga cuentas de ahorros y corrientes, advirtiéndolo para ello, que en el caso concreto se configuran las excepciones que ha trazado la jurisprudencia, para proceder al embargo de las cuentas que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y que tienen el carácter de inembargables, toda vez que se trata de una obligación contenida en una sentencia judicial de origen laboral.

En cuanto a la limitación del embargo, el artículo 599 del Código General del Proceso, facultó al Juez para limitar el embargo y secuestro a lo necesario, señalando para ello, que el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas.

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que la solicitud objeto de estudio se enmarca en el caso regulado por el numeral 10 del artículo 593 del Código General del Proceso¹², el Despacho limitará el valor del embargo y secuestro de las cuentas de ahorros y/o corrientes que se encuentren a nombre de **municipio de Palmira - Valle**, a la suma de seis millones ochocientos diez mil quinientos cuarenta y tres pesos m/cte. (\$ 6.810.543), lo cual corresponde al valor determinado en el auto interlocutorio No. 084 del 17 de febrero de 2022, incrementado en un diez por ciento (10%).

Esto atendiendo que, mediante el auto del 17 de febrero de 2022, previamente referido, se dispuso tener como liquidación del crédito la realizada por el Despacho por la suma total de seis millones ciento noventa y un mil cuatrocientos tres pesos m/cte. (\$ 6.191.403), por concepto de capital e intereses de mora.

En consecuencia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR EL EMBARGO y retención de los dineros que tenga el **MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE**, identificado con Nit. 891.380.007-3, en las siguientes entidades bancarias “*Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Sudameris, Bancolombia, Banco Agrario, Banco Popular, Av Villas, Davivienda, BBVA, Banco Caja Social y Banco Pichincha*”.

SEGUNDO: El embargo referido en el numeral anterior se limitará a la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$ 6.810.543)**, lo cual corresponde al valor determinado en el auto interlocutorio No. 084 del 17 de febrero de 2022, incrementado en un diez por ciento (10%), en atención a lo señalado en el artículo 599 del Código General del Proceso.

TERCERO: Para la efectividad de la medida, en los términos del artículo 593 del Código General del Proceso, se **ORDENA OFICIAR** a las entidades bancarias destinatarias de la misma, para que consignen la suma retenida a órdenes de este Juzgado en la **cuenta de depósitos judiciales No. 760012045001 del Banco Agrario de Colombia**, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación.

¹² **ART. 593. EMBARGOS.** Para efectuar embargos se procederá así: 1. (...)... 10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.

Advertir igualmente que se trata de un proceso ejecutivo cuyo título de ejecución es una sentencia judicial en la que se reconocieron prestaciones de índole laboral, remitiendo copia a cada una de ellas del presente auto y de la providencia que ordenó seguir adelante la ejecución.

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, se **ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES** del presente asunto que deben enviar un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen en el curso del proceso, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

QUINO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

LCMS.

Firmado Por:

Paola Andrea Gartner Henao

Juez
Juzgado Administrativo
Oral 001
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dc234629efd8b5330e9f3b8a52e265e6c17dc004fb035aecc9c898c0b7cf2531**
Documento generado en 03/03/2022 02:43:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>